

---

# EL PROGRAMA ECONOMICO DEL PSF

---

Miguel Muñiz

---



# 2

Desde una perspectiva política e ideológica resulta relativamente fácil definir el objetivo prioritario de un programa económico socialista como el francés, pero cuando se trata de hacer la ecuación económica de los costes y de los equilibrios, todo se vuelve *fundamental* y resulta relativamente difícil destacar un objetivo prioritario sin ser acusado de olvidar o despreciar las consecuencias negativas o las contradicciones con otros objetivos no renunciables para la sociedad. Pero frente a! mecanicismo de la economía, la izquierda presenta un voluntarismo de cambio y un conocimiento profundo de la realidad política y económica.

En efecto, el programa socialista francés está avalado por: unas elecciones que responden a un análisis político del que se deduce que la población piensa que la izquierda lo hará mejor que la derecha; una ideología que trata de romper las relacio-

nes de dominación entre las clases, y una coherencia técnica de un programa en la conciencia de que en economía todo es posible, y su mecanismo afecta tanto a un programa de derechas como de izquierdas. En cualquier caso, los hombres en-

cargados de llevarlo a cabo son profundos conocedores de la economía francesa.

El Programa Económico del Partido Socialista Francés tiene su *marco político* en una democracia consolidada e inserta en la comunidad internacional occidental, y viene definido más concretamente por el fracaso del neoliberalismo giscardiano ante la crisis y sus soluciones y por la política del Presidente Reagan. Estas son las coordenadas políticas en que se ha de mover.

El fracaso de la política del primer ministro de Giscard, Raymond Barre, estaba en que habiendo obtenido un relativo éxito en las premisas no tuvo las consecuencias prometidas, porque de nada sirven las políticas sensatas si no impiden que sigan existiendo los problemas más graves: el paro y la inflación. La política de Barre consiguió unas cuentas del Estado relativamente saneadas (Francia presenta el déficit presupuestario más bajo de los países industrializados), el mantenimiento del franco, un control de las magnitudes monetarias, un endeudamiento exterior moderado y un déficit relativamente limitado en los pagos exteriores. Concedemos todo esto, aunque sería discutible el nivel del éxito; pero aunque así fuese: ¿de qué sirven —se preguntan los franceses— todas estas políticas sesudas y rutinarias si los efectos esperados de moderación de rentas y control de la inflación no se producen, ni la inversión se estimula para producir empleos y detener el aumento del paro, o bien habría que esperar diez años para que esto ocurriera?, cuando existen políticas más imaginativas y progresistas que benefician más directamente a la mayoría y pueden obtener resultados más positivos en relación con el paro. M. Barre creía que la lucha contra el paro sería el resultado, la fruta madura, de los grandes equilibrios; mientras tanto el paro seguía creciendo hasta alcanzar el 1.800.000, o sea, el 7,5 por 100 de la población activa francesa. Era necesaria una política voluntarista dirigida prioritaria

mente hacia la consecución de creación de puestos de trabajo y esto es lo que ofrece el programa socialista, frente a la rutinaria y tópica política de Raymond Barre. Por otro lado, la política de dominio económico de la administración Reagan no deja mucho margen para excesivos y rápidos éxitos y obliga a actuar con extrema prudencia. El mantenimiento de altos tipos de interés en los Estados Unidos «tendría consecuencias terribles: económicas, sociales y políticas, susceptibles de provocar fenómenos de desestabilización en los países europeos», ha dicho Jacques Delors, Ministro de Economía.

En cualquier caso esta medida americana pone en peligro la recuperación de la inversión en Francia —que habrá de ser subvencionada para compensar tales tipos de interés— y, por tanto, el empleo y el crecimiento. La subida del dólar está encareciendo las importaciones, especialmente de petróleo, y puede poner en peligro igualmente el crecimiento y empobrecerá a Francia en relación con el resto de los países. Todo esto no es improbable a la vista del desprecio que la Administración Reagan tiene para sus países *aliados* haciendo prevalecer sus tesis en favor de una estabilización en los Estados Unidos, «lo que redundaría en interés de todos», según la tesis de Reagan, por la que se justifica cualquier sacrificio de los *aliados* en favor de la *metrópoli*.

*El fracaso de la política de Barre y la imposición de la política americana* no son los únicos puntos de referencia política pero sí los más importantes, y que, en cualquier caso, ilustran bastante bien los límites y la oportunidad del objetivo prioritario del Programa Socialista que es el empleo.

Desde la *perspectiva ideológica*, la ruptura de las relaciones de dominación se enfrenta, por un lado, con unas condiciones de desigualdad de las más elevadas de la Europa industrial (el 0,7 por 100 de los franceses —125.000 familias— poseen tanto como el 60 por 100 de los franceses

**El Programa Económico del PSF tiene su marco político en una democracia consolidada e inserta en la comunidad internacional occidental.**

---

**El Programa del PSF  
va en el sentido de  
una mayor igualdad,  
control social de la economía  
y la independencia nacional.**

---

más pobres. Hay cinco veces más hijos de cuadros superiores que de obreros que terminan sus estudios secundarios); con una baja sindicación (no llega al 25 por 100 de los asalariados); con una escasa democracia industrial, y con una fuerte dependencia económica de otros países como Estados Unidos y la República Federal Alemana y, a su vez, un fuerte dominio sobre algunos países del Tercer Mundo, especialmente Africa (el 35,9 por 100 de los productos manufacturados se compran en el extranjero, frente al 31 por 100 en 1978; y en cuanto a los bienes de equipo profesionales hoy se compran el 53,1 por 100 en el extranjero, cuando en 1978 era el 41,5 por 100. La proporción del comercio exterior en el Producto Interior Bruto es en Francia del 24 por 100, frente al 7,8 por 100 en Estados Unidos y el 13 por 100 en el Japón). El programa ha de romper este modelo, pero en la conciencia de que ha de coexistir por mucho tiempo con el sistema de mercado y, por supuesto, queda bien claro que dicha ruptura no implicará, ni se plantea, un enfrentamiento entre clases sino que resolverá mediante la concertación, el espíritu contractual y la planificación democrática, espíritu que invade todo el Programa Económico Socialista.

El pleno empleo, la redistribución de rentas, el impulso a los equipamientos colectivos, la ampliación del sector público mediante nacionalizaciones, la conquista del mercado interior y la reducción de la importancia del comercio exterior, entre otros objetivos, van en este sentido de una mayor igualdad, control social de la economía y la independencia nacional; esto es, otro modelo.

De forma más concreta, el proyecto socialista se fija como primer objetivo sacar a Francia de la crisis y califica el paro como un despilfarro y un cáncer social que afecta a toda la población y, de una forma especial y discriminatoria, a los jóvenes, a las mujeres y a las personas de edad madura. En consecuencia, el Programa

considera la vuelta al pleno empleo como el objetivo que debe presidir todas las grandes opciones económicas tanto si se trata de la duración del trabajo, del ritmo

de crecimiento, de las relaciones industriales o de las opciones en materia de ordenación del territorio.

En cuanto a la *reducción de las desigualdades*, ésta será obtenida por el aumento prioritario de las rentas más bajas que afectan a las clases más desfavorecidas, especialmente el SMIC (salario mínimo), y de los subsidios a los incapacitados, el mínimo de vejez, el subsidio familiar y otros; en fin, el desarrollo de las prestaciones sociales junto con una fiscalidad más justa y un programa de prioridad a los equipamientos colectivos son las tres coordenadas básicas en las que se apoya la consecución de una mayor igualdad.

La reducción de la duración semanal del trabajo es una de las principales medidas destinadas a repartir el trabajo existente y a transformar las condiciones del trabajo, junto a la disminución de las cadencias y otras de intervención de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Frente a las 40 horas actuales conseguidas hace 44 años se fija como objetivo 35 horas a la semana, sin disminución de remuneraciones a alcanzar, por medio de negociaciones por ramas de actividad e, incluso, por empresas, teniendo en cuenta dos condiciones: el mantenimiento de una tasa elevada de utilización de los equipos y la presión de la concurrencia internacional.

Conseguir *una economía ni dominante ni dominada* pasa —en el Programa— por el equilibrio de las relaciones comerciales y financieras entre Francia y los países que la dominan (USA y Alemania), así como por aquellos que Francia domina (especialmente en Africa). De 1960 a 1978 la proporción del comercio exterior en el PIB ha pasado del 10 al 22 por 100 y se considera que esta extraversion se debe a la necesidad que tienen las multinaciona-

les de extender sus mercados y de desplazar sus unidades de producción para maximizar sus beneficios. Frente a la elección liberal de servir a los intereses de las multinacionales, la del Partido Socialista es detener el aumento de la participación del comercio exterior en el PIB y reducirlo por debajo del 20 por 100 en 1990.

Para obtener todos los objetivos anteriores es necesario —según el Programa Socialista— un crecimiento fuerte y diferente. Se rechaza la austeridad o *sobriedad* en el crecimiento porque los objetivos establecidos y la mejora de la posición de los más desfavorecidos es imposible con un crecimiento cero. Al mismo tiempo trata de cambiar el contenido de la producción para que responda a las necesidades reales, por un lado, y a las nuevas suscitadas por el cambio de modo de vida: vivienda, equipamientos colectivos, protección del medio, etc.

El programa declara que para conseguir este crecimiento nuevo, más igualatorio, autónomo y creador, los motores del viejo conocimiento coexistirán por mucho

tiempo y, por ello, no tiene mucho sentido discutir si la reactivación ha de venir por el consumo o por la inversión.

El control social de la economía supone *limitar el papel del mercado*. Sobre este punto el Programa se expresa de la siguiente forma:

«Mientras que las virtudes del mercado son exaltadas como nunca por una pléyade de *nuevos economistas*, discípulos de la escuela de Chicago, el susodicho mercado demuestra todos los días su incapacidad para conciliar las grandes funciones de la economía.»

«En las leyes del mercado los hombres que padecen la crisis no pueden reconocer más que un sistema hecho para privilegiar a los poderosos en detrimento de los más débiles. Cuanto más rico es uno más oportunidades tendrá de salir del círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad.»

Los socialistas no tomarán el mercado

tal como funciona hoy. Es *el plan* el que debe decidir, en función del interés general y de las previsiones, la orientación de las grandes inversiones y de él debe surgir el modelo de desarrollo, la reducción de las desigualdades, el equilibrio regional y la relación con el resto del mundo. Sus grandes instrumentos son el Presupuesto de las Administraciones Públicas y de la Seguridad Social; el dominio y control de la financiación; un poderoso sector público económico; procedimientos contractuales por los que las obligaciones asumidas son la contrapartida de las ventajas consentidas. Es en este sentido, y con estos medios, en el que el plan es el regulador global de la economía, y se deja para el mercado el ajuste puntual entre la oferta y la demanda.

El plan debe ser, por tanto, el lugar donde se toman las grandes decisiones de inversión en concertación con las empre-

---

**El Programa Socialista insiste repetidamente en considerar a la industria como la actividad productiva que jugará el papel determinante.**

---

sas y colectividades, y lo mismo para los equipamientos sociales. En primer lugar, el plan debe aplicarse a la industria que, para los socialistas franceses, continuará

siendo, por mucho tiempo, el motor del desarrollo.

El recurso al procedimiento contractual será la norma de las relaciones del Estado con las empresas públicas y las grandes empresas privadas. En contrapartida, el Estado garantizará los recursos financieros necesarios a las inversiones programadas.

«Ir a lo esencial, pero a lo esencial solamente: esto significa que se planifica la producción pero no el comercio; la orientación de las grandes empresas, pero no la de las pequeñas y medianas; la inversión pero no los precios o los salarios; la formación de los grupos industriales pero no para cada empresa. En resumen, se planifican las orientaciones pero no el detalle de la ejecución. Allí donde se detiene el plan, la iniciativa de los agentes económicos industriales y el espíritu de empresas recuperan sus derechos y el papel del mercado su utilidad.»

El Programa Socialista insiste repetidamente en considerar a *la industria* como la actividad productiva que jugará el papel determinante. La industria francesa —declara— debe ser potente y diversificada, capaz de cubrir lo esencial de las necesidades expresadas en el mercado interior y de ocupar un cierto número de posiciones fuertes en el mercado internacional.

No se trata de una orientación autárquica ni ultraespecializada de la industria, sino de conseguir una mayor autonomía de la economía francesa, y, en este sentido, la inserción creciente de la economía en la división internacional del trabajo tiene como consecuencia el abandono progresivo de sectores esenciales de la actividad económica (construcción naval, textil, siderúrgica, electrónica de consumo), lo que representa un coste social y económico considerable. Tal política responde, en el análisis socialista, a los intereses de un cierto número de grandes grupos industriales, pero va en contra de los intereses de los trabajadores y de los del país.

Por el contrario, es urgente reducir la penetración abusiva en nuestro mercado de ciertas producciones, invirtiendo en esos sectores para hacerlos competitivos.

El esfuerzo industrial se centrará tanto en los bienes de equipo, en los que la dependencia tecnológica es preocupante, como en los productos intermedios y de consumo (electrodomésticos, electrónica de consumo, muebles, etc.) en los que el nivel de penetración extranjera alcanza niveles críticos (más del 85 por 100 del mercado francés de motos, cámaras fotográficas, máquinas de coser; 50 por 100 del mercado de relojes, etc.).

La reabsorción del paro y el desarrollo de actividades no productivas (educación, salud, cultura, protección de la naturaleza) serán posibles si se crean empleos industriales y gracias al excedente creado en la industria.

El Programa Socialista añade que los socialistas deben recuperar, por su cuenta la idea de un imperati-

vo industrial abandonado por la burguesía giscardiana.

La industria es, pues, la *vanguardia*, pero esta consagración industrial no se basa en un discurso productivista o en el sacrificio de los trabajadores al viejo estilo, sino simplemente la constatación de que una Francia autónoma y económicamente competitiva sólo es posible con una industria fuerte. Una Alemania que dedica el 47 por 100 de su población activa a la industria, y con salarios altos, frente a sólo el 38 por 100 en Francia, avala esta opción socialista.

Para llevar a cabo su política industrial los socialistas proponen la *ampliación del sector público* a los grandes grupos industriales mediante su nacionalización, de forma que constituyan un instrumento de orientación y estímulo de la actividad industrial; y este papel debe ser compatible con la autonomía de gestión de estas empresas que será asegurada mediante contratos que tales empresas públicas harán con el Plan. Se sale así al paso de las críticas —y el peligro real— de una burocratización de la actividad empresarial que las nacionalizaciones pueden llevar consigo y hacerlas estériles como instrumento.

El sector público ampliado se extenderá a las actividades que determinan la independencia tecnológica, que viven de subvenciones públicas o que son dominadas por un centro de acumulación capitalista gozando de una verdadera posición de monopolio nacional.

En el campo del comercio exterior el Programa Socialista, después de denunciar las *políticas proteccionistas* más o menos evidentes de la mayor parte de los países con los que mantiene importantes relaciones (Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia), se declara opuesto a un proteccionismo indiscriminado que daría lugar a una regresión en el nivel de vida.

Pero tampoco suscriben un libre comercio incondicional; para los socialistas la libertad de cambio no es un dogma, que es lo mismo que decir que si el libre cam-

**Para llevar a cabo su política industrial los socialistas proponen la ampliación del Sector Público a los grandes grupos industriales, nacionalizándolos**

bio constituye un obstáculo para la ruptura del modelo que se propone será abandonado en la medida precisa.

Hemos tratado —con todos los riesgos

de la simplificación y de la selección— los puntos económicos que, de forma más importante, dan el marco ideológico del Programa Socialista, es decir, la doctrina sobre el beneficio, el mercado, la planificación, la autonomía productiva, las desigualdades, el trabajo, los motores del desarrollo, papel del sector público, los instrumentos, etc. Por supuesto, constituyen un cambio radical en la concepción de la economía respecto al modelo que la derecha ha impuesto en los últimos decenios, sin que, por otra parte, ese radicalismo vaya a suponer ni traumas, ni modelos autoritarios o colectivistas. Por el contrario, es la búsqueda dinámica de un modelo socialista por la vía del contrato, de la concertación y de la planificación democrática, lo que supone la coexistencia por mucho tiempo, con concepciones netamente capitalistas, de la sociedad y la economía.

Con este mercado doctrinal y político, la lucha contra el paro es el objetivo principal de las medidas económicas concretas que han de presentar una *coherencia técnica* con otros objetivos relativos a la inflación, la competitividad de la industria y el nivel de vida de los franceses. El paro en Francia alcanza la cifra de 1.800.000 parados, un 7,4 por 100 de la población activa, lo que supone una tasa inferior a la de Bélgica e Irlanda: 10,5 por 100; España: 14 por 100; Gran Bretaña: 9,5 por 100; Dinamarca: 9,3 por 100; Italia: 8,8 por 100, y superior a la de Holanda: 6,7 por 100; Alemania: 4,7 por 100, y Grecia: 1,0 por 100. En un año, el paro aumentó el 4 por 100, y en julio terminaron la escolaridad 750.000 jóvenes que llegan al mercado de trabajo, al mismo tiempo que el número de despidos sigue siendo importante.

Ante este panorama las medidas concretas se basan en un relanzamiento selec-

**La lucha contra el paro es el objetivo principal de las medidas concretas que deben estar en coherencia con otros objetivos relativos (inflación, competitividad).**

tivo de la economía por un aumento del consumo popular, a partir de una elevación de rentas bajas junto con la reducción del tiempo de trabajo, un programa

de inversiones públicas y privadas, una reducción de las cargas sociales de las empresas y una política activa de formación profesional.

La elevación de las rentas más bajas se concreta en un aumento del 10 por 100 del SMIC (salario mínimo), que afecta a 850.000 trabajadores. Esta medida de relanzamiento económico tiene, además, su justificación en que el poder adquisitivo del SMIC ha bajado un 2,4 por 100 desde 1976.

Además, se elevarán los subsidios por incapacidad, los subsidios familiares y los mínimos de vejez y de vivienda.

La reducción del tiempo de trabajo propone pasar de las 40 horas semanales de la actualidad a 35 horas, conseguir la quinta semana de vacaciones y reducir la edad de jubilación voluntaria a los 60 años.

La elevación del SMIC presenta dos problemas principalmente. El primero es que al aumentarlo en un 10 por 100, el número de trabajadores con salario mínimo aumentará a millones si no se produce una elevación, a su vez, de los salarios por encima del mínimo. Fundamentalmente son las pequeñas y medianas empresas las que se verán afectadas (sobre todo aquellas que tienen dificultades), dado que las empresas grandes pagan, en general, salarios por encima del mínimo. Por otro lado, si se mantiene la libertad de precios, como ha asegurado Mitterrand, será difícil evitar que las empresas no repercutan las alzas salariales en sus precios, lo que supondrá una mayor inflación.

Por otro lado, *el relanzamiento de la demanda interna* por el alza de las remuneraciones más bajas entraña un aumento de las importaciones de bienes de consumo con su consecuencia negativa en el déficit anterior.

En cuanto a las medidas de reducción

del tiempo de trabajo sin disminución de remuneraciones, puede suponer un aumento de costes adicionales. Todos los peligros citados inciden en uno de los elementos claves de la economía francesa cual es la competitividad de las empresas, condición necesaria para invertir y para obtener la autonomía frente a otros países.

Ahora bien, todos estos peligros, que son evidentes, tienen su límite.

En efecto, el relanzamiento *no se hará contra las empresas y éstas recibirán compensaciones si las alzas del salario mínimo y la reducción del tiempo de trabajo les afecta negativamente*. Esta compensación consistirá en una contribución del Estado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, en la concesión de créditos privilegiados tanto en el plazo como en el tipo de interés, así como en un aumento del crédito. En este punto es significativo que el Gobierno francés, para

financiar esta contribución a las pequeñas y medianas empresas, haya acudido a aumentar un impuesto que repercutirá en el precio de la gasolina, medida no muy popular en Francia donde el automovilista es (o era) *intocable* políticamente.

Por otro lado no se permitirá que tales alzas repercutan en los precios, y en cualquier caso se argumenta que la inflación en Francia responde a causas estructurales y no a desórdenes coyunturales. En efecto, la política de R. Barre consistió en la *sana gestión* del presupuesto del Estado, de la masa monetaria, etc. y, sin embargo, la inflación en Francia alcanza el 14 por 100 en 1980, y desde 1977 ha crecido constantemente (9 por 100). Según el Partido Socialista las estadísticas internacionales muestran que los salarios franceses son los más bajos de los países industrializados, exceptuando Gran Bretaña y Japón, y que, además, han perdido poder adquisitivo desde 1979. Ambos aspectos suponen que los salarios no han sido determinantes de la inflación.

En cualquier caso, el conjunto de las

medidas de relanzamiento de la demanda por elevación de las rentas más bajas supone un gasto público adicional de 5.300 millones de francos (90.000 millones de pesetas) (incluyendo lo que el Estado aporta a las empresas como compensación del efecto de la elevación del SMIC sobre los costes), y un aumento del poder de compra de 16.500 millones de francos (280.000 millones de pesetas), que representa el 0,5 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB), lo que no parece exagerado y alarmante cuando en la actualidad se prevé una recesión del 1 por 100 de dicha magnitud económica. Esa adición al poder de compra se estima que se repartirá así: el alza de los salarios bajos supondrá unos 6.000 millones de francos (102.000 millones de pesetas), las prestaciones sociales suplementarias unos 4.500 millones de francos (76.000 millones de pesetas) y el desbloqueo del Fondo de Acción Coyuntural otros 6.000 millones de francos

**El relanzamiento de la demanda interna no se hará contra la empresa y éstas recibirán compensaciones si las alzas del salario les afecta negativamente.**

(102.000 millones de pesetas). En conjunto, una demanda potencial nueva del 0,5 por 100 del Producto Interior Bruto.

Decíamos que el coste de las medidas

sociales supondría un aumento del gasto público de 5.300 millones de francos, pero, además, existen unas medidas de creación de puestos de trabajo, por un lado, que consiste en un plan de ayuda y de incentivos al empleo juvenil, que debería permitir la contratación de 650.000 jóvenes, consistente en la reducción de cotizaciones sociales, cursos de formación y contratos de empleo-formación financiados con la ayuda del Estado; y, por otro lado, la creación de empleos públicos por medio de asignaciones presupuestarias de créditos que permitan, en una primera fase, 54.290 empleos públicos nuevos para llegar a los 210.000 que Mitterrand se ha comprometido a financiar muy rápidamente. En conjunto supondrá un gasto adicional de 6.800 millones de francos (115.000 millones de pesetas) que serán financiados por una mayor presión fiscal sobre las personas más ricas (afectará a

108.000 contribuyentes, menos del 1 por 100) y por impuestos especiales sobre los beneficios excepcionales de los bancos y de las sociedades petrolíferas, así como por un impuesto sobre ciertos gastos no indispensables de las empresas, entre otros. Todos los impuestos tienen carácter excepcional.

El balance se establece así (en millones de francos):

Creación de empleos .....	2.700
Ayuda a las empresas .....	2.750
Viviendas sociales .....	155
Varios .....	1.205
<b>TOTAL .....</b>	<b>6.810</b>
Impuestos s/las mayores fortunas.	3.400
Elevación de IVA para hoteles de cuatro estrellas .....	160
Impuestos s/barcos .....	50
Impuestos s/ciertos gastos de empresa .....	1.200
Impuestos s/bonos excepcionales de la Banca .....	1.000
Impuesto s/soc. petrolíferas ....	1.000
<b>TOTAL .....</b>	<b>6.810</b>

En consecuencia, el Presupuesto no se verá afectado y el déficit actual de 51.600 millones de francos seguirá siendo el más bajo de los países industriales.

*En cuanto a la mayor presión fiscal* está cuidadosamente elegida, tiene carácter excepcional y se enmarca en un sistema fiscal cuya presión es la de más bajas de los países industrializados (un 23 por 100 del PIB francés, mientras que en Alemania es el 25 por 100, en Bélgica el 30,9 por 100, en Holanda el 29,3 por 100 y en el Reino Unido el 27,7 por 100) y, además, es injusto al superar en gran proporción los impuestos indirectos a los directos. El impuesto sobre la renta es muy bajo y supone un 5,2 por 100 del PIB, mientras que para el conjunto de los países de la Comunidad Económica Europea representa casi el 12 por 100 del PIB (11,3 por 100 en Alemania, 11,2 por 100 en Gran Bretaña,

15,5 por 100 en Bélgica, 13,4 por 100 en Holanda, 10,4 por 100 en EE.UU. y 22,6 por 100 en Suecia).

En cuanto a la reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales, y la quinta semana de vacaciones, se trata de objetivos a conseguir en cinco años y mediante negociación por rama de actividad e, incluso, por empresa, de acuerdo con las condiciones del mercado. Según la patronal, esta medida supondría un crecimiento de la masa salarial del 4 por 100 por año; sin embargo, además del plazo y del carácter negociador y no autoritario de tal medida, el Gobierno admite que es necesario ligar la reducción a la productividad y a una nueva organización y condiciones de trabajo. Por tanto, esta medida no tiene por qué tener la repercusión que denuncia la patronal y sí debe permitir la creación de más puestos de trabajo.

Pero, quizá, la medida que en el contexto del Programa adquiere mayor significado socialista es la de las nacionalizaciones de importantes grupos industriales y de la banca; y ello porque se consideran esenciales para conseguir el cambio de política industrial, la financiación necesaria y la orientación del ahorro hacia las inversiones prioritarias. Para los socialistas no es admisible dejar a los grupos privados la definición de las grandes opciones industriales, y, al mismo tiempo, rechazan el peligro de burocratismo al establecer un sistema de funcionamiento por el cual cada grupo nacionalizado propondrá al Gobierno un contrato de plan elaborado democráticamente, que fije sus objetivos y sus medios, esto es, sus actividades, su financiación, la participación en el mercado, la inversión, el empleo y las condiciones de trabajo. La empresa pública negociará con un interlocutor administrativo único y el control que se ejercerá sobre

**Para los socialistas no es admisible dejar a los grupos privados la definición de las grandes opciones industriales.**

ella será ligero y «a posteriori», y será dotada de una gran autonomía de gestión. No habrá intervención autoritaria de los poderes políticos.

Los nuevos dirigen-

tes de estas empresas tendrán garantizado un cierto período de tiempo para la ejecución de su misión.

Los precios industriales serán libres siempre que exista una

competencia real y no una situación monopolista. En el caso de servicios públicos, como las tarifas de transportes, serán objeto de una compensación financiera.

Se trata de una política voluntarista, socialista pero sobreviviendo en un sistema de mercado capitalista, y que trata de conciliar la eficacia industrial y el control de la gestión por los trabajadores; la independencia nacional y el respeto a las leyes de mercado; la planificación y la flexibilidad de funcionamiento.

En concreto, se nacionalizarán nueve grupos industriales, y se completa el control público de la banca y los seguros. Ello

## **El Programa prevee la nacionalización de nueve grupos industriales, completando el control público de la banca y los seguros.**

sumado al 22 por 100 ya nacionalizado anteriormente representa alcanzar el 50 por 100 de la industria francesa, esto es, 1.310.000 millones de francos (22 billones de pesetas). Los nueve grupos industriales pertenecen a los sectores de tecnología punta: farmacéutica, química, electrónica, telefonía, nuclear, armamento, informática y aeronáutica.

El éxito del Programa Socialista francés está en conseguir el difícil equilibrio entre los condicionantes políticos internos y externos, los medios y la fuerza para la ruptura del modelo de dominación, y la coherencia técnica de las medidas concretas.

supone más de un millón de personas y más de 350.000 millones de francos de cifra de negocios (seis billones de pesetas): el 28 por 100 de la industria francesa, que